

R EPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL



**JUZGADO CINCUENTA Y DOS (52) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá D.C., quince (15) de enero de dos mil diecisiete (2017)

Acción : **Tutela**
Radicación : **11001-33-42-052-2017-00533-00**
Accionante : **Johan Manuel Galindo Tolosa**
Accionada : **Nación – Ministerio de Transporte**
Asunto : **Derecho de Petición**

Decide el Despacho la acción de tutela interpuesta por el señor Johan Manuel Galindo Tolosa en nombre propio en contra de la Nación – Ministerio de Transporte.

I. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor Johan Manuel Galindo Tolosa en nombre propio, acudió ante este Despacho, con el fin de solicitar la protección de su derecho fundamental de petición presuntamente vulnerado por el sujeto pasivo.

Como supuestos fácticos que soportan sus pretensiones, expuso en síntesis que (fl.1):

El 31 de agosto de 2017 en ejercicio del derecho de petición el señor Johan Manuel Galindo Tolosa elevó petición de información al sujeto pasivo, petición que fue reiterada el 31 de octubre del mismo año, sin que hasta la fecha se hayan contestado las mismas.

II. TRAMITE PROCESAL

Por reunir los requisitos legales del artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, la acción de la referencia fue admitida el 14 de diciembre de 2017 (fl.14) y notificada electrónicamente de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del CPACA¹, el mismo día (fls.15-17).

Agotadas todas las etapas procesales dispuestas por el Decreto 2591 de 1991, el Despacho entra a decidir de fondo la presente acción de tutela.

III PRETENSIONES

El señor Johan Manuel Galindo Tolosa, solicita al juez de tutela, que en amparo de su derecho de petición, se ordene a la entidad accionada contestar de fondo las peticiones formuladas.

IV INTERVENCION DE LA TUTELADA

La entidad accionada contestó la acción de la referencia por medio electrónico el 18 de diciembre de 2017 (fl.18) y ante la Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos de Bogotá físicamente el 19 de diciembre del mismo año (fl.24), en el cual solicitó negar las pretensiones de la tutela, toda vez que los escritos de petición radicados por el actor fueron contestados mediante los Oficios Nos. 20171330371121 del 11 de septiembre de 2017 y 20171330468621 del 7 de noviembre de 2017, actos administrativos que se enviaron a notificar a la dirección registrada en los referidos escritos mediante la Empresa de Servicios Postales Nacionales 472, quien las devolvió porque "no lo reciben inquilinato" y "Casa 4 pisos" (sic).

No obstante lo anterior, afirmó que se remitió nueva respuesta a los interrogantes del accionante a través del Oficio No. 20171330550091 del 15 de diciembre de 2017, allegando una copia de la misma al expediente.

¹ Artículo 197. *Dirección electrónica para efectos de notificaciones.* Las entidades públicas de todos los niveles, las privadas que cumplan funciones públicas y el Ministerio Público que actúe ante esta jurisdicción, deben tener un buzón de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones judiciales.

Para los efectos de este Código se entenderán como personales las notificaciones surtidas a través del buzón de correo electrónico.

V CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. COMPETENCIA:

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción de Tutela, en virtud de lo establecido por el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, y teniendo en cuenta que la Nación – Ministerio de Transporte es una entidad que forma parte de la Rama Ejecutiva en el sector central del orden nacional.

2. PROBLEMA JURÍDICO:

Conforme a lo señalado, el problema jurídico se centra en resolver el siguiente interrogante: ¿Es procedente el amparo al derecho fundamental de petición toda vez que la entidad accionada no efectuó correctamente la notificación de los actos administrativos mediante los cuales resolvió los interrogantes formulados por el actor?

GENERALIDADES DE LA ACCIÓN DE TUTELA:

La acción de tutela es un mecanismo de defensa constitucional preferente y sumario, consagrado en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, para que toda persona pueda reclamar ante los Jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares que presten un servicio público y respecto de los cuales el afectado se encuentre en circunstancias de subordinación o indefensión, siempre y cuando no exista otro medio judicial de defensa para lograr la satisfacción o reparación del derecho coartado o puesto en peligro, de tal manera que no ha sido instituida para suplantar los procedimientos ordinarios ni para invadir la órbita de competencia de otras jurisdicciones.

En el presente caso, el accionante actúa en nombre propio en defensa de sus derechos e intereses; por su parte, la entidad accionada, esto es, la Nación – Ministerio de Transporte, goza de legitimidad por pasiva para ser parte en esta acción, por cuanto de su presunto actuar omisivo se desprende la violación a los

derechos fundamentales del actor, siendo además que fue notificada en legal forma. Por tanto, están legitimadas para actuar como accionante y demandada, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, 5º y 10º del Decreto 2591 de 1991.

3. MARCO JURIDICO Y JURISPRUDENCIAL

El derecho fundamental de petición.

La jurisprudencia constitucional, en relación a la protección del derecho fundamental de petición, en sentencia T- 1067 de 7 de diciembre de 2006, con Ponencia del doctor Humberto Antonio Sierra Porto, señaló:

"4.- En virtud del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, las personas pueden presentar ante las autoridades solicitudes de interés general o particular y obtener resolución de manera pronta. Con fundamento en la cláusula constitucional, el legislador ha establecido algunos parámetros dentro de los cuales debe ser garantizado el derecho de petición.

5.- Acerca de los lineamientos para garantizar el respeto del derecho de petición, la jurisprudencia constitucional ha afirmado que el derecho de petición comprende algunos elementos: (i) pronta resolución, (ii) respuesta de fondo, (iii) notificación de la respuesta al interesado.

A la luz de estos criterios, en sentencia T-814 de 2005, la Corte precisó: "(...) la pronta resolución atiende a la necesidad de que los asuntos sean respondidos de manera oportuna y dentro de un plazo razonable el cual debe ser lo más corto posible. Por consiguiente, la falta de respuesta o la resolución tardía vulneran el derecho de petición. Acerca de esta condición, la Corte Constitucional ha establecido que no es posible exigir que se resuelva de fondo antes de los lapsos establecidos normativamente.

Posteriormente, en providencia T- 134 de 2006, esta Corporación indicó, frente al alcance del derecho de petición: "lo que se persigue es que el derecho de la persona obtenga una respuesta de fondo, clara y precisa, dentro de un término razonable que le permita, igualmente, ejercer los mecanismos ordinarios de defensa judicial, cuando no está de acuerdo con lo resuelto".

Conforme a lo anterior, debe señalarse que el derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, se traduce en la facultad que tienen los ciudadanos de formular solicitudes para obtener información o de pedir copias de documentos no sujetos a reserva a las autoridades correspondientes o a los particulares, además de obtener una pronta y completa respuesta a sus inquietudes.

La naturaleza de este derecho ha sido establecida en la Constitución de 1991 como de aplicación inmediata, dada su pertenencia al ámbito de los derechos

inherentes a la persona y su relevancia para la participación de la misma, así como para asegurar el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, al igual que los deberes sociales del Estado y la posibilidad de hacer realizables otros derechos fundamentales².

Innumerables pronunciamientos de orden constitucional han definido los presupuestos esenciales del derecho de petición así: i) en la posibilidad de formular peticiones respetuosas, por motivos de interés general o particular y ii) en la obtención de una pronta resolución del asunto puesto en consideración. Estos componentes del derecho de petición son inescindibles, esto es, que el goce y satisfacción del mismo se realiza una vez ambos se verifiquen; por lo tanto, el derecho se concreta en la formulación de una petición, pero se efectiviza con la resolución pronta y material, independientemente de si la respuesta resulta o no favorable al sentido de la misma³.

Así las cosas, respecto a la oportunidad para resolver una petición el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en su artículo 14 precisa:

*"Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción"*⁴.

De la necesidad que la respuesta emitida por la entidad sea notificada al peticionario.

La jurisprudencia constitucional ha establecido que el núcleo esencial del derecho de petición, se ve vulnerado cuando aún emitida la respuesta que absuelve los interrogantes elevados en ejercicio del derecho precitado está no ha sido correctamente comunicada y notificada a la parte interesada.

En tal sentido, la Sentencia de 19 de marzo de 2013, expediente T-3.671.269, señala:

"Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa

² Corte Constitucional. Sentencias T-552 de 1998, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-542 de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández y T-451 de 2011. M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, entre otras.

³ Corte Constitucional. Sentencias T-495/92, T-010/93, T-392/94, T-392/95 y T-291/96.

⁴ Artículo 14 del CPACA.

del servidor que conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio, examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a conocimiento directo e informado del solicitante.⁵

4.6. De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.

4.6.1. Sobre la obligación y el carácter de la notificación, debe precisarse en primer lugar, que esta debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante.

4.6.2. Esta característica esencial, implica además que la responsabilidad de la notificación se encuentra en cabeza de la administración, esto es, que el ente al cual se dirige el derecho de petición está en la obligación de velar porque la forma en que se surta aquella sea cierta y seria⁶, de tal manera que logre siempre una constancia de ello.

La constancia que logre obtener la entidad de la notificación de su respuesta al peticionario, constituye la prueba sobre la comunicación real y efectiva que exige la jurisprudencia para perfeccionar el núcleo esencial del derecho de petición, desde luego, siempre que la respuesta se ajuste a las exigencias que líneas atrás fueron desarrolladas (...)

El Título II Capítulo V del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en sus artículos 66, 67, 68 y 69 establece la forma en la cual deben notificarse los actos administrativos de contenido particular y concreto de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 66. DEBER DE NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Los actos administrativos de carácter particular deberán ser notificados en los términos establecidos en las disposiciones siguientes.

ARTÍCULO 67. NOTIFICACIÓN PERSONAL. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse.

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.

⁵ Sobre el mismo tema la sentencia T-553 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

⁶ Por ejemplo, en la sentencia T-545/96, M.P. Antonio Barrera Carbonell, la Corte concedió la tutela al derecho de petición en virtud de que la respuesta acerca del reconocimiento del derecho de pensión de la accionante había sido enviada a una dirección diferente a la aportada por ésta. Consideró la Corte que no había existido efectiva notificación a la peticionaria.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación.

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso anterior también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades:

1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta manera.

La administración podrá establecer este tipo de notificación para determinados actos administrativos de carácter masivo que tengan origen en convocatorias públicas. En la reglamentación de la convocatoria impartirá a los interesados las instrucciones pertinentes, y establecerá modalidades alternativas de notificación personal para quienes no cuenten con acceso al medio electrónico.

2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la circunstancia de que dichas decisiones quedaron notificadas. A partir del día siguiente a la notificación se contarán los términos para la interposición de recursos.

ARTÍCULO 68. CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días.

ARTÍCULO 69. NOTIFICACIÓN POR AVISO. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal."

De esa manera, se tiene que los actos administrativos particulares y concretos deben ser notificados personalmente, para lo cual se puede enviar una citación: (i) por cualquier medio eficaz, (ii) a la dirección física vista en el expediente, (iii) al correo electrónico visible en el escrito o que se pueda obtener del registro mercantil y/o (iv) por fax, en el cual se le indique al interesado que debe acercarse dentro de los 5 días siguientes a su recepción a las dependencias de la entidad para notificarse personalmente del contenido de cierta decisión.

Ahora bien, en caso que no se tenga información del lugar de residencia del peticionario, correo electrónico o número de fax, se debe realizar la publicación de un aviso en el página electrónica y las instalaciones de la entidad por 5 días junto con el acto administrativo por medio del cual se da respuesta a la solicitud o se decide una actuación administrativa, para que finalizado dicho término y una vez desfijado el aviso se entienda surtida la notificación personal.

Por otro lado, se resalta que la publicación del aviso para que se surta la notificación personal debe efectuarse en los eventos en los cuales la entidad luego de enviar la comunicación a la dirección física visible en el escrito de petición, es devuelta por la empresa postal porque la dirección no existe o hay inconsistencias en la información suministrada, ya que de esa forma se garantiza que el interesado de cualquier modo tendrá conocimiento de la resolución de su petición o de una actuación administrativa.

Lo anterior, dado que no tendría sentido efectuar una nueva comunicación junto con el acto administrativo a notificar a la misma dirección que con anterioridad la empresa postal había devuelto porque la dirección no existe, el peticionario no reside o cualquier circunstancia que se pueda dar, por lo cual en respeto del debido proceso lo procedente es realizar el aviso y publicarlo en la página electrónica y la sede de la entidad por 5 días, para que una vez desfijado el referido aviso se entienda surtido la notificación personal según lo indica el inciso 2° del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Sobre el particular, el Consejo de Estado en concepto del 4 de abril de 2017 con ponencia del Magistrado Álvaro Namén Vargas bajo el radicado No. 11001-03-06-

000-2016-00210-00(2316) en consulta elevada por el Departamento Nacional de Planeación al estudiar la procedencia de la notificación por aviso a través de la página web y en la sede de la entidad señaló:

“2. Procedencia de la notificación por aviso mediante publicación en la página electrónica y en un lugar de acceso al público de la entidad

Del texto del artículo 69 de la ley 1437 de 2011 se advierten dos situaciones reguladas por la norma, así:

i) La notificación por aviso: Cuando figure en el expediente una dirección, número de fax o correo electrónico, o se puedan obtener en el registro mercantil, caso en el cual se debe remitir el aviso con la copia del acto administrativo a uno de los anteriores destinos.

ii) La publicación del aviso: Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, caso en el cual se publicará la copia íntegra del acto administrativo en la página electrónica de la entidad y en un lugar del acceso al público de la misma.

La situación a la que se refiere la norma en el primer caso es aquella en la cual la administración conoce una dirección, número de fax o correo electrónico del interesado al cual puede enviarse o remitirse el acto administrativo, o se puede obtener del registro mercantil alguno de estos datos. La efectividad de esta forma de notificación supletoria de la personal radica precisamente en que la administración cuenta con alguno de los datos señalados en la ley que permitan la remisión al interesado del aviso junto con el acto administrativo, a efectos de que éste pueda recibir y enterarse del acto administrativo para el oportuno ejercicio de sus derechos.

El segundo evento a que se refiere la norma se presenta cuando no se conoce información sobre el destinatario y, por ende, debe la administración proceder a publicar el aviso con la copia íntegra del acto administrativo tanto en la página electrónica de la entidad como en un lugar de acceso al público de la misma, con lo cual se da publicidad al acto y se surte la notificación mediante estas publicaciones.

Al respecto ha señalado la doctrina²²:

“La segunda situación que regula el artículo 69 que se analiza consiste en la notificación por aviso de la persona de quien se desconozca toda dirección o número de fax, para lo cual se procederá de esta forma:

-Se redactará el aviso con el contenido explicado. Además, el aviso deberá advertir que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro de la publicación del aviso.

-Se publicará tanto en la página electrónica de la entidad como en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad.

-El lapso de esa publicación será de cinco días.

-La notificación se entenderá hecha al día siguiente al de terminación de la publicación, momento en el cual empezará a contarse el término para interponer los recursos, si los hubiere, y para los demás efectos propios de la notificación”.

En los casos a que alude la consulta, esto es: cuando el predio o inmueble correspondiente a la dirección proporcionada por el interesado se encuentra cerrado, la dirección no existe o está incompleta, el aviso es devuelto por la empresa de correo argumentando que el destinatario ya no vive en el lugar, la dirección es errónea o no existe, son claros ejemplos de que se desconoce la información del interesado, tanto así que no se pudo surtir con éxito la notificación pues no se pudo remitir o entregar el aviso y el acto administrativo respectivo al interesado.

Ahora, es claro que si bien el legislador no puede prever todas y cada una de las múltiples e innumerables situaciones que en la práctica se pueden presentar en materia de notificaciones y que impiden surtir con éxito la remisión del aviso junto con el acto administrativo, lo que sí se observa con claridad es que el sentido de la expresión contenida en el artículo 69 ibídem “Cuando se desconozca la información sobre el destinatario”, resulta omnicomprendensiva de todos aquellos eventos en los cuales la administración no logra surtir la notificación por aviso, ya sea porque los datos que se tienen del interesado están incompletos, o no permiten la entrega del aviso y del acto administrativo, o resultan de imposible acceso.

Cuando se presente alguna de tales situaciones corresponde a la administración acudir al último mecanismo previsto en la ley para llevar a cabo la notificación por aviso mediante la publicación del mismo junto con el acto administrativo por el término de cinco (5) días en la página electrónica de la entidad y en un lugar de acceso al público dado que no fue posible lograr la notificación personal del acto administrativo, ni la remisión del aviso junto con el acto administrativo a un destino porque la falta de información o alguna circunstancia diferente, como las anotadas, lo impidieron.

Es de anotar que esta previsión legal es garantista del debido proceso y los derechos de los administrados dado que exige que en forma previa se hayan agotado los procedimientos allí señalados para surtir la notificación personal y por remisión o envío del aviso antes de ordenar acudir en última instancia a la notificación mediante la publicación en la página electrónica y en un lugar público de la entidad para que el interesado tenga conocimiento de la decisión. Por lo tanto es el último instrumento con que cuenta la administración para llevar a cabo la notificación del acto a fin de no impedir el ejercicio de las funciones administrativas.

En el caso de que el aviso sea rehusado por el notificado es claro que a pesar de haberse adelantado el procedimiento de notificación conforme a la norma, por una conducta del propio interesado que pretende entorpecer las funciones de la administración, éste impide

que se surta con éxito la notificación. En este evento se entiende surtida la notificación personal, ya que es por voluntad del propio interesado y su conducta, las que impiden que la notificación se pueda llevar a feliz término, sin perjuicio de la obligación que le atañe a la Administración de dejar constancia en el expediente de lo ocurrido y valerse de los medios que requiera para este fin. Así y a pesar que este caso no corresponde al evento regulado en la norma, el cual se refiere a aquella situación en la cual se desconoce la información sobre el destinatario, se considera más garantista del debido proceso adelantar la notificación por aviso mediante la publicación en la página electrónica de la entidad y en un lugar de acceso al público.

De otro lado, la ley no exige que exista la certificación de la entrega del aviso para otorgar validez a este tipo de notificación, lo que si exige la norma es la constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación, en los siguientes términos:

"En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal".

Sin embargo no puede perderse de vista el propósito de estas normas y el efecto de su inobservancia, para señalar que en el evento en que no exista certeza del envío y entrega del aviso, debe proceder la administración a llevar a cabo la notificación por aviso mediante la publicación del aviso y del acto administrativo respectivo en la página electrónica y en un lugar de acceso al público. Sobre este tema, basta traer a colación lo manifestado por el Consejo de Estado en sentencia del 30 de octubre de 2014 ya citada²³:

"La notificación en debida forma asegura que la persona a quien afecta una decisión judicial o administrativa se halle enterada de su sentido y certeza de en qué momento ha tenido lugar la transmisión oficial de la respectiva información.

En relación con la efectiva prueba de la notificación, esto es, la constancia de envío de la comunicación, es claro que se trata del documento que arroja certeza del procedimiento mismo y del cual se desprende el verdadero conocimiento de la actuación".

En conclusión, solamente la constancia de envío de la notificación otorga certeza de que se adelantó el procedimiento conforme a la ley y del cual se deriva el conocimiento por parte del interesado de la actuación administrativa, esto es que la notificación cumplió su cometido de enterarlo del acto administrativo respectivo." (Negrillas fuera del texto original.)

En efecto, se tiene que en los casos en los cuales se devuelva la comunicación enviada a una persona para surtir la notificación personal de un acto administrativo particular y concreto, en garantía del debido proceso debe la entidad publicar un aviso junto con el referido acto administrativo en su página electrónica y en un

lugar de acceso al público durante 5 días, para que al finalizar dicho término se entienda surtida la notificación personal, dejando las constancias de rigor dentro del expediente.

CASO CONCRETO

Se encuentra probado dentro del expediente que el accionante radicó escritos en ejercicio del derecho de petición ante la entidad accionada el 31 de agosto y el 31 de octubre de 2017 bajo los radicados Nos. 20173210548402 y 20173210697742 indicando como dirección de notificaciones la Calle 14 A No. 15-18 de Bogotá (fls.3 a 4).

La entidad accionada, afirmó dentro del escrito de contestación de la acción de tutela que los referidos escritos de petición fueron resueltos a través de los Oficios Nos. 20171330371121 del 11 de septiembre de 2017 y 20171330468621 del 7 de noviembre del mismo año, los cuales fueron se enviaron a comunicar para que surtiera la notificación personal a la dirección indicada por el actor, entidad quien devolvió las comunicaciones porque "no la reciben en esta dirección inquilinato" y "casa 4 pisos" (fls.29 a 33).

De igual forma señaló, que expidió el Oficio No. 20171330550091 del 15 de diciembre de 2017, en el cual procedió a contestar nuevamente la petición del accionante identificado con el radicado No. 20173210697742 del 31 de octubre de 2017 sin allegar al expediente prueba del envío de la citación a dicho sujeto procesal para que surta la notificación personal (fls. 26 a 27).

Ahora bien, conforme lo expuesto en el marco jurídico y jurisprudencial de la presente providencia, el núcleo esencial del derecho fundamental de petición, no sólo cobija que la respuesta sea congruente con lo solicitado y en término, sino que también, está, se correctamente comunicada y notificada a la parte interesada.

En tal sentido, observa el Juzgado que se encuentra vulnerado el derecho de petición del actor, toda vez que si bien la entidad accionada contestó los interrogantes formulados mediante los Oficios Nos. 20171330371121 del 11 de septiembre de 2017 y 20171330468621 del 7 de noviembre del mismo año, no los notificó de forma correcta.

Como se indicó, siguiendo el concepto emitido por el Consejo de Estado en los eventos en los cuales la comunicación sea devuelta por la oficina postal porque la dirección no existe, es de difícil acceso o existen errores en la información suministrada y por tanto es imposible efectuar la notificación personal, la entidad en respeto al debido proceso debe realizar la publicación de un aviso junto con el acto administrativo a notificar en sus instalaciones donde haya acceso al público y en su página web por 5 días, para que finalizado ese término y desfijado el aviso se entienda surtida la notificación personal.

En ese orden de ideas, el Ministerio de Transporte al observar que las comunicaciones por la cuales se pretendían citar al accionante para que se realizara la notificación personal de los Oficios Nos. 20171330371121 del 11 de septiembre de 2017 y 20171330468621 del 7 de noviembre del mismo año fueron devueltas por la empresa Servicios Postales Nacionales 472, debió efectuar los avisos correspondientes y publicarlos junto con dichos actos en la página electrónica y en sus instalaciones durante 5 días, para que de esa manera se surtiera la notificación personal.

Dentro de los anexos allegados con la contestación de la acción, no obra prueba que denote que el sujeto pasivo procedió a efectuar la publicación del aviso junto con los actos administrativos que resolvieron las peticiones del actor en su sitio web o en sus instalaciones, por lo que omitió agotar el último trámite para garantizar que el accionante conociera los actos expedidos en las actuaciones administrativas.

Por otra parte, advierte el Juzgado que la entidad accionada profirió el Oficio No. 20171330550091 del 15 de diciembre de 2017, en cual nuevamente absuelve las peticiones del actor expuestas en el radicado No. 20173210697742 del 31 de octubre de 2017, no obstante, no allegó prueba que permita determinar que la misma fue comunicada y/o notificada al actor, motivo por el cual la vulneración al derecho de petición del señor Galindo continua.

Así las cosas, este Juzgado amparará el derecho fundamental de petición del accionante y en consecuencia le ordenara a la Nación – Ministerio de Transporte que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo: (i) proceda a publicar en su página electrónica y en un lugar de acceso al público en sus instalaciones el aviso junto con el Oficio No.

20171330371121 del 11 de septiembre de 2017 mediante el cual resolvió la petición identificada con el radicado No. 20173210548402 del 31 de agosto de 2017 según los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 y (ii) se disponga a publicar en su página web y en un lugar de acceso al público en sus instalaciones el aviso junto con el Oficio No. 20171330468621 del 7 de noviembre de 2017 mediante el cual resolvió la petición identificada con el radicado No. 20173210697742 del 31 de octubre de 2017 según los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cincuenta y Dos (52) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, administrando justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución.

FALLA:

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición del señor Johan Manuel Galindo Tolosa, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.010.221.889 de Bogotá, vulnerado por la entidad accionada, por las razones señaladas en la parte considerativa de este fallo.

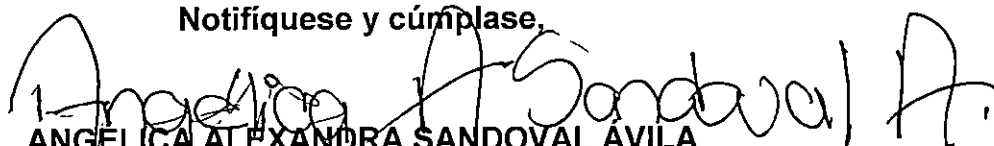
SEGUNDO: ORDENAR al Ministro de Transporte o quien haga sus veces, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo: (i) proceda a publicar en su página electrónica y en un lugar de acceso al público en sus instalaciones el aviso junto con el Oficio No. 20171330371121 del 11 de septiembre de 2017 mediante el cual resolvió la petición identificada con el radicado No. 20173210548402 del 31 de agosto de 2017 según los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 y (ii) se disponga a publicar en su página web y en un lugar de acceso al público en sus instalaciones el aviso junto con el Oficio No. 20171330468621 del 7 de noviembre de 2017 mediante el cual resolvió la petición identificada con el radicado No. 20173210697742 del 31 de octubre de 2017 según los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en este expediente, conforme lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

La presente decisión puede ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación (Decreto 2591 de 1991, artículo 31).

Si el presente fallo no fuere impugnado, envíese el cuaderno principal de esta actuación a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión (inciso 2º artículo 31 Decreto 2591 de 1991).

Notifíquese y cúmplase.


ANGÉLICA ALEXANDRA SANDOVAL ÁVILA

Juez

S.A.